



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, ocho (08) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

DEMANDANTE:	Magaly Jaramillo Gil
DEMANDADA:	Colpensiones y Porvenir S.A.
TIPO DE PROCESO	Ordinario Laboral
DECISIÓN:	Confirma parcialmente Revoca y Adiciona
Radicado	05001-31-05-011-2019-00630-01 (325) 05001310501120190063001

AUTO

Conforme con lo dispuesto en los artículos 74 y 75 del Código General del Proceso, en los términos del poder obrante el archivo 07Alegatos Porvenir, y en el archivo 06Sustitución poder Colpensiones -02Segunda instancia, se reconoce personería para actuar en representación de Colpensiones a la doctora Liliana Cháves Ortega con Tarjeta Profesional 303.709 del Consejo Superior de la Judicatura, y para actuar en representación de Porvenir SA al doctor Octavo Andrés Castillo Ocampo con Tarjeta Profesional 380.131 del Consejo Superior de la Judicatura.

En la fecha la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por las Magistradas **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL**, **MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, y **CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO**, quien actúa como ponente, se reunió para resolver el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de Porvenir y Colpensiones, y el grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de ésta última, en el proceso ordinario laboral adelantado por la señora **MAGALY JARAMILLO GIL** en contra de **COLPENSIONES** y de **PORVENIR SA**, frente a la decisión adoptada por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín.

Una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala profiere, por escrito, la siguiente:

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA.

1. ANTECEDENTES:

La señora Magaly Jaramillo Gil presentó demanda en contra de Colpensiones y Porvenir SA, buscando se declare la nulidad y/o ineficacia de su traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (en adelante RAIS), administrado por Porvenir SA; declarar su afiliación al Régimen de Prima Media (en adelante RPM) que hoy administra Colpensiones vigente y sin solución de continuidad desde la fecha de afiliación al sistema pensional; que se condene a Porvenir S.A. a trasladar el saldo de la cuenta de ahorro individual, todos los aportes, el bono pensional y toda suma recibida por el motivo de traslado de régimen, con sus rendimientos y sin ningún tipo de descuento como los gastos de administración; se ordene a Colpensiones a recibir los aportes trasladados; y las costas del proceso.

Fundamentó sus pretensiones en que se afilió al RPM hoy administrado por Colpensiones en agosto 27 de 1986, trasladándose a Colpatria Sociedad Administradora de Fondos de Cesantías y Pensiones SA hoy Porvenir S.A en mayo 13 de 1999, ante los ofrecimientos de un asesor de ese fondo de mejores condiciones que en el RPM y la advertencia de la crisis económica del ISS que le iba a impedir pensionarse; y aseveró que el asesor *«no le suministró información clara, detallada y precisa»* de los escenarios pensionales en ambos regímenes y sus características.

Relató que el fondo tampoco le brindó asesoría de la favorabilidad de permanecer en el RAIS o regresar al RPM con antelación al cumplimiento de los 47 años, en abril 18 de 2011, y fue en mayo 27 de 2019 que les solicitó formulario de afiliación, documentos de la asesoría, proyecciones de la pensión realizadas en los dos regímenes, número de asesorías brindadas y certificado de la historia laboral; que fue respondida en mayo 27 de 2019 con la entrega de documentos menos las asesorías de las cuales no tenían soporte; reflejándose en la simulación pensional la diferencia superior de la mesada que obtendría en el RPM a la que obtendría en el RAIS. Por lo que en agosto 29 de 2019 solicitó a Colpensiones su traslado, que fue respondida de forma negativa.

Admitida la demanda e integrada la litis, las demandadas se pronunciaron oponiéndose a las pretensiones de la demanda.

2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

El Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 18 de abril de 2022, resolvió declarar la ineficacia de la vinculación al RAIS de la señora MAGALY JARAMILLO GIL administrado por Porvenir SA; ordenó a Porvenir SA., a trasladar del RAIS al RPMCPD administrado por Colpensiones junto con los aportes de la demandante como son cotizaciones, gastos de administración, con todos sus frutos e intereses, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, en razón a la declaración de la ineficacia del traslado, esto es, con los rendimientos que se hubieren causado y el porcentaje correspondiente a la garantía de pensión mínima, también deberá trasladar la prima de reaseguro de FOGAFIN y los aportes al fondo de solidaridad pensional que se hubieren causando en el tiempo en que la actora estuvo afiliada a dicha administradora. Ordenó a Porvenir SA a indexar los dineros a devolver por gastos de administración, consistentes en (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al fondo de garantía de la pensión mínima), durante el tiempo que la demandante estuvo afiliada a dicho fondo de pensiones y sin aplicar equivalencia alguna, igualmente dispuso que al momento de cumplir la orden los conceptos aparezcan discriminados por la AFP con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, aportes y demás información importante que los justifique. COLPENSIONES, deberá recibir los dineros entregados por PORVENIR S.A. y reactivar la vinculación de la demandante dentro del RPMPD, sin solución de continuidad. Costas a cargo de las entidades demandadas, como agencias en derecho la suma de \$1.500.000, correspondiendo el valor de \$1.000.000.00 a cargo de Porvenir SA, y la suma de \$500.000.00 a cargo de Colpensiones. No prospera las excepciones de prescripción propuesta por las entidades demandadas. Y absolver a las demandadas de las demás pretensiones incoadas en su contra por la parte actora.

3. RECURSO DE APELACIÓN:

3.1 RAZONES DEL RECURSO

3.1.2 APELACIÓN PORVENIR S.A.

La apoderada de Porvenir SA reprocha la decisión del juez de instancia porque no se tuvo en cuenta el principio de confianza legítima y seguridad jurídica, la buena fe objetiva del fondo, que para el año 1999 desde la creación de la coexistencia de regímenes pensionales, no se requería el deber de información, ni subreglas de este cumplimiento adjetivo y lo que busca es la cobertura de contingencias de vejez, invalidez y muerte, ni le requería parangón o comparativo en supuestos y no en aspectos consolidados. Que no hay lugar a las devoluciones de los gastos de administración y los rendimientos financieros porque no hacen parte de la cuenta de la accionante, tampoco del porcentaje destinado al fondo de garantías mínimas, ya que cumplió su finalidad y se encuentran extintas; así como que son expensas necesarias, ni el porcentaje destinado a las primas del seguro. Que no hay lugar a la indexación porque no hay rentabilidad periódica.

3.1.3. APELACIÓN COLPENSIONES

El apoderado de Colpensiones sustentó el recurso de apelación bajo el fundamento que la responsabilidad es exclusiva de los fondos privados y no se debe vincular a Colpensiones, por cuanto no tiene la obligación de soportar las cargas que fueron creadas por la desatención de dichos fondos. Por lo que solicita se modifique la forma de distribución bajo el entendido que la prestación económica que se deba reconocer al demandante debe estar a cargo por el fondo privado bajo los parámetros del régimen de prima media, o en su defecto hacer un nuevo cálculo. Se revoque la condena en costas por cuánto debe considerarse como un sujeto exógeno que no incurrió en desatenciones de sus obligaciones al litigio.

4. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

4.1. ALEGATOS DEMANDANTE

El apoderado judicial de la demandante sustentó sus alegaciones en que PORVENIR S.A. no probó que le hubiera suministrado información suficiente, completa, oportuna, veraz, detallada y comparativa, ni las proyecciones de lo que sería su pensión de vejez en ambos regímenes para efectos de realizar el traslado del RPM al RAIS; no es viable hablar de este fenómeno por cuanto la pretensión de ineficacia está ligada a un derecho imprescriptible e irrenunciable a la seguridad social como lo es la pensión de vejez, conforme el art. 48 de nuestra Constitución

Política. En la sentencia SL 1421 de 2019. Por lo que solicita se confirme la sentencia objeto de apelación.

4.2. ALEGATOS COLPENSIONES

La apoderada esgrime como argumentos que era la parte demandante quien debía ejercer el despliegue probatorio atinente a demostrar insuficiencia en la información por parte de la AFP, aspecto que en modo alguno logra satisfacerse únicamente con la declaración de parte, lo que deriva en la asunción del riesgo de no haber probado, que se traduce en desestimar las pretensiones; que las manifestaciones de la parte actora no configuran negaciones indefinidas, lo que imposibilita pasar a hacer un análisis de lo dispuesto en el artículo 1604 del CC; que las reglas establecidas por la jurisprudencia genera un desequilibrio procesal, que tiene como resultado un grave impacto en el ejercicio del derecho de defensa, pues deja sin opciones probatorias a la parte pasiva, lo que se traduce en transgresión al debido proceso.

Reprochó además que en el presente caso que el traslado por vía judicial se pretende habiendo cercanía a la edad mínima pensional y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y de la experiencia, la finalidad de la parte actora es la búsqueda del reconocimiento de una prestación por vejez en el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, encontrándose que por largo tiempo no ha habido aportes al régimen pensional público, esto es, no se han realizado las cotizaciones que permitan la consolidación y proyección de un cálculo actuarial dentro del periodo mínimo de carencia establecido por el legislador, para efectos del reconocimiento pensional, lo que a la postre transgrede parte del objetivo de la norma; siendo que el traslado entre regímenes pensionales encontrándose el afiliado a diez años o menos de la edad mínima pensional, sólo se encuentra autorizado para los beneficiarios del régimen de transición. Y que se revoque la condena en costas impuestas al ente que representa porque es un tercero ajeno al proceso que no fue quien ocasionó el traslado y no se trata de una parte vencida en el proceso.

4.3. ALEGATOS PORVENIR S.A.

El apoderado esgrimió como reparos que no existían razones fácticas o jurídicas para declarar la ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación

Definida al Régimen de Ahorro Individual, pues la decisión de la parte actora se realizó de forma espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley; que cumplieron con el deber de información para la época, contó con oportunidades para trasladarse de régimen y no lo hizo; que su motivación de traslado reposa en el supuesto hecho de no cumplirse sus expectativas sobre el eventual monto de la pensión que recibiría en ese fondo; frente a aquellos documentos que acrediten la entrega de información, no era una obligación vigente para el momento del traslado de la parte actora así como tampoco la obligación del buen consejo, doble asesoría y de desincentivar la afiliación; que incumplió la parte actora con el deber de diligencia y cuidado en sus propios negocios.

Que no se puede ordenar el traslado de los recursos pensionales, los rendimientos y las cuotas o gastos de administración puesto que han cumplido plenamente con su cometido y no se encuentran en el patrimonio de la AFP, por haber sido destinados a cubrir gastos, generación de frutos o rendimientos que se ven en la cuenta del afiliado; que la inversión de dichos gastos de administración en seguros previsionales y en la generación de rendimientos, no se dio de manera antojadiza, sino por el contrario se dio por mandato legal; que tampoco es posible que se condene a una indexación de los valores ordenados a trasladar, pues dado que dicho detrimento que sufre el valor económico de los aportes se busca reponer con la indexación, el mismo se resarciría con los rendimientos financieros que se generaron debido a su buena gestión, y que en razón de haber obrado con buena fe objetiva no hay lugar a condena en costas.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA.

Conoce la Sala del recurso de apelación y la consulta de la sentencia a favor de Colpensiones de conformidad con lo señalado en los artículos 66A y 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en concordancia con lo dispuesto por la H. Corte Constitucional en la Sentencia C-424 de 2015.

5.2. PROBLEMA JURÍDICO

Esta Sala se ocupará de analizar, si hay cabida a la declaratoria de la ineficacia del traslado de la demandante Magaly Jaramillo Gil al RAIS, con el consecuente regreso al RPM administrado por COLPENSIONES, y, en caso de ser así establecerá cuáles

son las consecuencias que de ello se derivan. Y si hay lugar a la condena en costas a cargo de Colpensiones.

5.3. HECHOS RELEVANTES PROBADOS

De acuerdo con el acervo probatorio arrimado, no hay duda que el demandante se afilió al RPMPD hoy administrado por Colpensiones, desde el 27/08/1986, según se verificó en la historia laboral de la demandante obrante en (fl. 45 – 49 archivo 003); trasladándose al RAIS el 13/05/1999 a través del Fondo privado de pensiones Colpatria (absorbido por Porvenir SA) como consta en el formulario de vinculación (fl. 21 archivo 003) con fecha de efectividad en fecha 01/07/1999, luego cambió a Horizonte en 29/09/20000 y finalmente a Porvenir SA el 01/01/2014, como consta en el certificado de Asofondos visible a folios 88 (archivo 003). Y que solicitó regresar al RPM administrado hoy por Colpensiones el 29/08/2019 (fl. 42 a 44).

5.4. INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL.

El primer aspecto que debemos observar consiste en recordar que, de acuerdo con el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, la selección de cualquiera de los regímenes previstos en el literal a) de esa disposición es libre y voluntaria, de manera que, cuando un empleador o cualquier persona natural o jurídica, en cualquier forma, desconozca ese derecho, se hará acreedor a las sanciones del inciso 1º del artículo 271 de la misma ley. Esta última norma establece que cualquier persona que atente contra el derecho del trabajador a su afiliación, traerá como consecuencia que la afiliación quedará sin efecto.

Lo segundo a considerar es que, si bien la afiliación es libre y voluntaria, también es cierto que, las administradoras de pensiones están compelidas a cumplir con el deber de información, de tal manera que la decisión de traslado esté precedida del cumplimiento de ese mandato.

Acerca del deber de información la CSJ desde la sentencia SL-31989 de 2008, sentó una jurisprudencia muy sólida que se mantiene inclusive hasta esta parte, que es importante memorar:

(...) Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor

y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica. Bajo estos parámetros es evidente que el engaño que protesta el actor tiene su fuente en la falta al deber de información en que incurrió la administradora; (...) su obligación era la de anteponer a su interés propio de ganar un afiliado,

Por lo tanto, no le asiste razón a Porvenir S.A por cuanto es insuficiente afirmar que la afiliada expresó su voluntad al permanecer en el RAIS y que su vinculación conserva validez, porque no es posible evidenciar un verdadero consentimiento informado cuando se carece de los elementos suficientes para adoptar una decisión adecuada a las circunstancias particulares de la afiliada, tal como lo establecen los artículos 2 y 12 del Decreto 663 de 1993 la entidad administradora siempre ha estado obligada a brindarla.

Es decir, el fondo de pensiones está en la obligación de proporcionar, al usuario que pretende trasladarse de régimen, todos aquellos elementos que resultan determinantes para tomar una decisión plenamente informada. En ese orden, el traslado no surte efectos cuando se le oculta información o no se le brinda en forma completa, porque en ese caso no existe una decisión verdaderamente libre y voluntaria, ya que la decisión de traslado de régimen pensional puede variar según la información que se brinde sobre todo cuando se efectúe la proyección de la mesada pensional (sentencias CSJ SL373-2021 MP Clara Cecilia Dueñas Quevedo; CSJ SL12136-2014 MP Elsy del Pilar Cuello Calderón y CSJ SL17595-2017 sentencia de instancia)

Esta obligación que tiene la entidad administradora de acreditar esa diligencia también tiene respaldo en el artículo 1604 del Código Civil, al disponer que «*la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo*». De tal manera que, un análisis concordado entre lo anteriormente expuesto y lo afirmado por la actora en cuanto a que «*no le suministró información clara, detallada y precisa*», por tratarse de una negación indefinida, no requiere ser probada, pero si traslada la carga de la prueba en el fondo demandado, que deberá probar en contrario, es decir, que sí proporcionó la información completa y suficiente, en las etapas preparatorias y previas al traslado.

Por lo tanto, conviene no olvidar el criterio postulado por la CSJ en su Sala Laboral, vertido en la SL19447-2017, en ella profundizó sobre la constatación del deber de información, afirmó que era ineludible, por lo que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación era insuficiente. Es por ello que *«el acto de afiliación o traslado de régimen pensional debe estar acompañado de la decisión libre y voluntaria del afiliado, la cual no se limita a la simple manifestación de quien decide trasladarse, sino que debe ajustarse a los parámetros de libertad informada, es decir, la solicitud y trámite de traslado de régimen pensional, debe estar precedida de una información clara, comprensible y suficiente, sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea»* (CSJ SL7561-2021, CSJ SL5595-2021, CSJ3719-2021), la cual no se infiere de la simple firma del formulario de afiliación.

Se insiste, el cumplimiento del deber de información por parte de las AFP y su acreditación en el proceso, no se puede demostrar con las simples manifestaciones genéricas del afiliado de aceptar las condiciones del traslado, ellas resultan insuficientes ya que quien debía probar la diligencia y cuidado era quien estaba obligado a emplearla, en este caso la respectiva administradora del fondo pensional (CSJ SL4964-2018).

En ese orden de ideas, al presentarse el traslado de la carga de la prueba del afiliado a las Administradoras de Fondos de Pensiones, por ser estas las que cuentan con los medios técnicos y los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, era PORVENIR S.A. quien debía probar en el proceso que brindó una asesoría personalizada y completa a la demandante al momento de su traslado de régimen pensional, analizando las circunstancias particulares de su caso; debiéndole informar por ejemplo, que existen diferentes modalidades pensionales, que el valor de la pensión de vejez en el RAIS depende del capital consignado en la cuenta de ahorro individual; que si no completa el capital suficiente para obtener por lo menos una pensión mínima -equivalente al 110% del SMLMV a la fecha de expedición de la L.100/93, actualizado con el IPC (Índice de Precios al Consumidor), debe seguir cotizando, si es o no beneficiario del régimen de transición pensional y las ventajas que se derivan del mismo, así como efectuarle las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios hacia el futuro de ambas opciones, con el cálculo aproximado del monto pensional que le correspondería, y en fin, mostrarle al afiliado **con detalle**, las ventajas y desventajas de tomar la decisión de traslado de régimen pensional, para que la misma sea realmente libre y voluntaria.

Y es que debe reiterarse que la labor del funcionario del fondo privado de pensiones en el momento previo a hacer efectivo el traslado de régimen, debe trascender al “deber del buen consejo”, como lo ha señalado la jurisprudencia laboral, en la medida que es responsabilidad de dichas administradoras y de sus promotores, velar por la información suministrada a sus usuarios -art. 10 D.720/94 por el cual se reglamentaron los artículos 105 y parcialmente el 287 de la Ley 100 de 1993.

Ahora, si bien Porvenir S.A. afirmó al contestar la demanda que a la demandante se le brindó la asesoría requerida para el caso aunado a que no era una obligación legal en esa época suministrar mayor información o realizar una proyección de índole técnica o financiera (fl. 67 a 86 archivo 003), de acuerdo con la jurisprudencia ya descrita tenía la carga de acreditarlo, sin embargo, omitió allegar al proceso prueba suficientemente persuasiva. Y como lo viene sosteniendo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la oportunidad de la información se juzga es al momento del acto jurídico del traslado de régimen pensional, y no con posterioridad a aquel.

Así las cosas, en el caso a estudio considera la Sala que se incumplió uno de los presupuestos para la eficacia del acto de traslado de régimen pensional, esto es, el deber de información, cuya ausencia, dada su incidencia en el derecho pensional, trae como consecuencia la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional, y con ello, que las cosas vuelvan al estado anterior en el que se encontraban antes de aquella como que la demandante nunca se trasladó al RAIS. Razón por la que en este punto se confirmará la decisión.

5.5. CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE INEFICACIA DEL TRASLADO.

Considera la Sala que al declararse la ineficacia del traslado de la demandante del RPMPD al RAIS, todos aquellos actos jurídicos que se celebraron con posterioridad a la suscripción de dicha afiliación pierden su fuerza vinculante; por lo que es legítimo que **PORVENIR S.A.** traslade a **COLPENSIONES** los aportes obligatorios efectuados por la demandante, esto es, el saldo de la cuenta de ahorro individual con sus rendimientos financieros, las cuotas de administración, los seguros previsionales, y los aportes al Fondo de garantía de pensión mínima debidamente indexados, como lo ha determinado la jurisprudencia uniforme de nuestro órgano de cierre jurisdiccional desde la sentencia con Rad 31989 del 9 de sept/08, M.P.

Eduardo López Villegas, reiterada en las SL 4989 y 4964 del 14 de nov/18, radicados 47.125 y 54.814, respectivamente, M.P. Gerardo Botero Zuluaga, SL 1688 del 8 mayo/19, SL 2877 del 29/07/2020, Rad. 78667, M.P Clara Cecilia Dueñas Quevedo, SL 3034 Rad. 86961 del 07/07/2021; 3571 Rad. 88476 del 04/08/2021; 3708 Rad 88556 del 18/08/2021; 3709 Rad. 88875 y 3710 Rad. 88550 del 18/08/2021; 3769 Rad, 84296 del 11/08/2021, SL755 Rad 90519, SL756 Rad 90548 del 09/03/2022 y SL1019 Rad 87915 del 16/03/2022, M.P Luis Benedicto Herrera Díaz; y SL843 Rad 85499 del 16/03/2022 M.P Gerardo Botero Zuluaga.

Y, es que esta Sala no encuentra elementos válidos para separarse del precedente del máximo órgano de cierre de la justicia ordinaria laboral vertido en la sentencia CSJ SL 1637 del 11 de mayo de 2022, Radicado 89208, M.P. Luis Benedicto Herrera Díaz (Corte Constitucional SU 354 del 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo, y SU 611 del 4 de octubre de 2017, M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez). De ahí que, por estar acorde con ese precedente, se adicionará la sentencia de primer grado disponiendo que el traslado de los recursos, deberá hacerse con el suministro de la información prevista en el artículo 2.2.2.4.8 del Decreto 1833 de 2016 -por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones-, esto es, entregando la historia laboral del afiliado con la información discriminada y detallada por cada periodo cotizado, especificando cada valor, “...*junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen ...*”, obligaciones que deberán cumplirse dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia –art. 16 Decreto 692 de 1994.

En este orden de ideas, la decisión de ineficacia del traslado no afecta la sostenibilidad fiscal del sistema general de pensiones, pues así lo explicó la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en la sentencia SL2877 de 2020, indicando que se descarta la posibilidad de que se generen erogaciones adicionales, al ordenarse el reintegro de todos los recursos a COLPENSIONES, para efecto del reconocimiento de la prestación económica a que tenga a derecho el demandante, de acuerdo a la reglas prevista por el régimen de prima media con prestación definida.

En suma, con la imposición de la actualización lo que se procura es que, con fundamento en los principios de equidad e integralidad del pago, las condenas impuestas se ajusten a su valor real y, con el fin de impedir que los créditos

representados en dinero pierdan su poder adquisitivo por el fenómeno inflacionario.

Es decir, procura que la obligación se satisfaga de manera completa e integral.

Tal como lo ha determinado la jurisprudencia uniforme de nuestro órgano de cierre jurisdiccional desde la sentencia con Rad 31989 del 9 de sept/08, M.P. Eduardo López Villegas, reiterada en las SL 4989 y 4964 del 14 de nov/18, radicados 47.125 y 54.814, respectivamente, M.P. Gerardo Botero Zuluaga, SL 1688 del 8 mayo/19, SL 2877 del 29/07/2020, Rad. 78667, M.P Clara Cecilia Dueñas Quevedo, SL 3034 Rad. 86961 del 07/07/2021; 3571 Rad. 88476 del 04/08/2021; 3708 Rad 88556 del 18/08/2021; 3709 Rad. 88875 y 3710 Rad. 88550 del 18/08/2021; 3769 Rad, 84296 del 11/08/2021, SL755 Rad 90519, SL756 Rad 90548 del 09/03/2022 y SL1019 Rad 87915 del 16/03/2022, M.P Luis Benedicto Herrera Díaz; y SL843 Rad 85499 del 16/03/2022 M.P Gerardo Botero Zuluaga; resaltando en lo correspondiente a la indexación, que esta Corporación se ciñe a los parámetros establecidos recientemente por nuestro órgano de cierre, en sentencias SL 359-2021 y especialmente la SL 950 de 2022, en la que se señala:

... Por ello, en tratándose de afiliados, la Sala ha adoctrinado que tal declaratoria obliga a las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones --debidamente indexados-- con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Criterio que resulta igualmente aplicable respecto del porcentaje destinado a constituir el fondo de garantía de pensión mínima.

5.6. PRESCRIPCIÓN

La excepción de prescripción no está llamada a prosperar por cuanto la acción que involucra el tema de traslado de régimen pensional guarda relación inescindible con los requisitos y valor de la pensión, por lo cual se debe predicar la imprescriptibilidad de la presente acción, ver al respecto Sentencia SL-1421 de 2019, Radicado No. 56174 de 10 de abril de 2019.

En efecto, de manera reiterada y pacífica, la SCL de la Corte ha defendido la tesis de que las acciones judiciales encaminadas a que se compruebe la manera en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles. Lo anterior, bajo la premisa de que ni los hechos ni los estados jurídicos prescriben, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de crédito y obligaciones que de ello surjan.

5.7 COSTAS PROCESALES

Finalmente, en relación con el punto de impugnación de Colpensiones relativo a la condena de las costas procesales a su cargo, al respecto el artículo 365 del C.G.P indica que se trata de una condena objetiva que opera por el solo hecho de resultar la parte vencida en el proceso o en el recurso; por lo que al haber prosperado las pretensiones de la demanda, declarándose la ineficacia del traslado de régimen, resultando la demandada Porvenir S.A. vencida en el proceso, sí hay lugar a imponer tal condena a su cargo, y a favor de la parte activa (Ver al respecto CSJ SCL, Rad 40993 del 22 de enero de 2013, M. P. RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO). Sin embargo, en el caso de Colpensiones debemos tener en cuenta que la condena que se emite en su contra no es por su actuar negligente u omisivo, sino que es la consecuencia de la ineficacia de una afiliación por la desidia que tuvo un tercero con el demandante; así que las condenas que asume hoy Colpensiones solo surgen con la decisión de esta providencia, por lo que no hay lugar a condenar a esta codemandada a las costas de primera instancia, y en tal sentido se revocará parcialmente el numeral quinto de la sentencia objeto de alzada.

Conforme con las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia apelada y revisada en consulta, se revocará, adicionará y confirmará parcialmente.

Sin Costas Procesales de Segunda Instancia a cargo de Colpensiones por haber prosperado parcialmente el recurso.

Las Agencias en derecho en esta instancia se fijan en la suma de 1 SMLMV a cargo de Porvenir SA en razón a que el recurso no salió avante.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

6. DECIDE:

PRIMERO: Revocar parcialmente el numeral quinto de la sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, el día 18 de abril de 2022, y en su

lugar, se **condena** en costas de primera instancia solo a Porvenir SA, a favor del demandante dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.500.000.00 a cargo de PORVENIR SA.

SEGUNDO: Adicionar el numeral **Segundo** de la sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, el 18 de abril de 2022, en cuanto que **PORVENIR S.A.** deberá trasladar a **COLPENSIONES** dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, además de los conceptos dispuestos en la primera instancia, la historia laboral de la afiliada con la información discriminada y detallada por cada período cotizado, según las consideraciones de esta sentencia.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada y consultada.

CUARTO: Sin Costas Procesales de Segunda Instancia. Las Agencias en derecho en esta instancia se fijan en la suma de 1 SMLMV.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Las Magistradas,


CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ